

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Medellín, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario con radicado número 05 001 31 05 019 2015 00580 promovido por la señora **FABIOLA OVIEDO VEGA** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, al cual fue vinculada en calidad de Interviniente Ad Excludendum la señora **CIPRIANA MERCADO DE SALAZAR.**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por esta última frente a la sentencia emitida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín.

Mediante auto de 15 de septiembre de 2017 el Juzgado de conocimiento aceptó el desistimiento del proceso presentado por la señora Fabiola Oviedo Vega, con la advertencia de que dicha decisión tiene efecto de cosa juzgada y de sentencia absolutoria (Fls. 104).

De conformidad con el numeral 1º del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **076**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Cipriana Mercado de Salazar, demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su compañero permanente Jaime León Piedrahita Peña, y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que el señor Jaime León Piedrahita Peña estuvo casado con la señora Fabiola Oviedo Vega “...*pero esa unión solo duró 12 años, pues la citada señora en mención, abandonó a su esposo y a sus 3 hijos menores, y se fue a vivir con su amante, con quien convivió 11 años...*”. En mayo de 2006 se profirió sentencia de divorcio cesando los efectos civiles de matrimonio. Se aduce que “...*después de varios años y muchos altibajos y sufrimientos con sus hijos, decidió entregárselos a su madre, señora Fabiola Oviedo, cuando ésta aún vivía con su nueva pareja, y se fue a vivir solo, a casa de sus padres en la calle 65 C # 37-05 del barrio Villa Hermosa, donde siempre vivió la familia Piedrahita Peña, y de lo cual pueden dar testimonio los vecinos...*”. Que conoció al señor Jaime León Piedrahita Peña en 1974 cuando ella llegó a vivir al barrio Villa Hermosa y después de un tiempo se lo encontró en la calle manejando taxi “...*y fue entonces cuando me enteré de su separación y toda esa historia, y fue ahí cuando iniciamos conversaciones y más adelante una relación, primero a distancia porque yo trabajaba en el municipio de Caucasia y él estaba acá en Medellín...*”. Afirmo que convivió con el señor Jaime León Piedrahita Peña los últimos 7 años de su vida compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día de su fallecimiento ocurrido el 21 de julio de 2013 “...*solo estuvimos separados unos meses en el último año, como quiera que debido a su enfermedad, debió venirse de nuevo a casa de sus padres para recibir atención médica, pero igual yo venía cada 8 o 10 días acá y así repartía mi tiempo, pues mi trabajo estaba en Caucasia y además mi compañía es sus últimos días era perjudicial para él, porque yo había entrado en una depresión profunda, no solo a causa de su enfermedad, sino a causa de la muerte de mi hijo Fabio León Salazar Mercado, quien había muerto recientemente en una muerte trágica e inesperada y fue difícil enfrentar y superar esa situación...*”.

En sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la actora.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante en ejercicio del derecho de postulación, en su condición de abogada, considera que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en la medida que las declaraciones extrajuicio que obran en el expediente dan cuenta de su convivencia con el señor Jaime León Piedrahita Peña en Caucasia – Montelivano, mismas que no fueron tenidas en cuenta por el Despacho. E indicó “...otra razón que tengo es que yo viví en Caucasia y me quedaba muy difícil, toda la convivencia con él fue en Caucasia, hoy me quedó muy difícil que comparecieran los testigos que obviamente eran de allá, los que podían dar fe de que yo tuve la convivencia con Jaime en Caucasia, esta diligencia se fijó hace muchos meses y hay momentos hasta en los que fallecen los testigos porque el transcurso es muy largo para rendir el testimonio y una de las testigos que me dijo que viajaba anoche para colaborar con el testimonio no sé si llegó porque no la pude ubicar esta mañana, entonces yo puedo probar de muchas maneras que si tuve convivencia con Jaime Piedrahita, porque mucha gente fue testigo de esta convivencia desafortunadamente hoy no pudieron venir los demás testigos, pero las declaraciones extra juicio que existen en el proceso, también dan cuenta de eso...”.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones dentro del término legal presentó escrito de alegatos de conclusión aduciendo que la administradora de pensiones debe abstenerse de resolver derecho alguno, porque la jurisprudencia ha precisado que el conflicto de intereses en cuestión deber ser dirimido por la jurisdicción ordinaria laboral.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si a la señora Cipriana Mercado de Salazar quien invoca la calidad de compañera permanente, cumple el requisito legal de convivencia que le otorgue el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del pensionado Jaime León Piedrahita Peña.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa de folios 6 a 13, 56 a 63, 101 y 107 a 110 del expediente. La Sala encuentra:

- i) Que los señores Fabiola Oviedo Vega y Jaime León Piedrahita Peña contrajeron matrimonio el 21 de enero de 1984.
- ii) Que el Juzgado Sexto de Familia de Medellín mediante sentencia proferida el 9 de mayo de 2006 decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico por divorcio, celebrado por los señores Jaime León Piedrahita Peña y Fabiola Oviedo Vega el 21 de enero de 1984. Declaró disuelta la sociedad conyugal procediendo a su liquidación por cualquiera de los medios legales. Y ordenó la inscripción de la providencia en el folio de matrimonio, en el de nacimiento de los cónyuges y en el libro de varios de la Notaría Doce del Círculo de Medellín.
- iii) Que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, mediante la Resolución 007339 de 1º de abril de 2011 le concedió al señor Jaime León Piedrahita Peña la pensión de vejez, a partir del 1º de mayo de 2011 y en cuantía equivalente a \$1.322.709,00.
- iv) Que el señor Jaime León Piedrahita Peña falleció el 21 de julio de 2013.
- v) Que las señoras Fabiola Oviedo Vega y Cipriana Mercado de Salazar le reclamaron administrativamente a Colpensiones el 4 de octubre y el 5 de diciembre de 2013, respectivamente, la sustitución pensional invocando, en su orden, las calidades de cónyuge y compañera permanente del pensionado Jaime León Piedrahita Peña.
- vi) Que Colpensiones negó la prestación económica, a las mencionadas reclamantes, por medio de la Resolución GNR 270956 de 29 de julio de 2014, aduciendo que “...del material probatorio que reposa en el expediente

es palmaria la existencia de controversia entre las solicitantes pues tanto Oviedo Vega Fabiola y Mercado de Salazar Cipriana como en las diferentes declaraciones aportadas, se afirma que convivieron con el causante hasta la fecha de su deceso 21 de julio de 2013... La administradora de pensiones debe abstenerse de resolver derecho alguno, ya que dicho conflicto de intereses debe ser dirimido por la jurisdicción ordinaria...”.

- vii)** Que la señora Cipriana Mercado de Salazar dentro del término legal interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación frente al acto administrativo referido y Colpensiones por medio de las Resoluciones GNR 66223 de 7 de marzo y VPB 54958 de 31 de julio de 2015, confirmó lo resuelto en la Resolución GNR 270956 de 29 de julio de 2014, indicando:

“...Que teniendo en cuenta las pruebas aportadas al expediente pensional no es posible entrar a determinar de manera exacta la convivencia de cada una de las reclamantes con el asegurado fallecido, toda vez que tanto la cónyuge como la compañera permanente manifiestan haber convivido con el causante durante los últimos cinco años anteriores al fallecimiento.

Que de otra parte obra declaración extrajuicio rendida por la señora Soley Molina Rivas ante la Notaría Única de Caucaasia en la cual se manifestó “(...) Quiero agregar que el vivía bajo el mismo techo y hasta el día de su deceso con su señora madre EMA PEÑA y las veces que el salía de la ciudad era para visitar a su compañera permanente Cipriana Mercado de Salazar (...).

Que de igual manera se observa en las pruebas aportadas, fallo proferido por el Juzgado Sexto de Familia de Medellín en proceso radicado con el No. 0500131102006026900, sentencia 0152 del 09 de mayo de 2006 en la cual falla:

PRIMERO: SE DECRETA LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATÓLICO POR DIVORCIO, celebrado por los señores JAIME LEON PIEDRAHITA PEÑA Y FABIOLA OVIEDO VEGA, el 21 de enero de 1984.

SEGUNDO: Se declara disuelta la sociedad conyugal y se procederá a su liquidación por cualquiera de los medios legales.

...

Que en el registro civil de matrimonio aportado por la señora Fabiola Oviedo Vega obra nota marginal de cesación de efectos civiles del matrimonio conforme al fallo proferido por el Juzgado Sexto de Familia de Medellín.

Que para esta vicepresidencia no está determinada la convivencia de las peticionarias con el causante dentro de los cinco (5) años anteriores al fallecimiento.

Que adicional a lo anterior, en salvaguarda de los derechos incoados tanto por la señora Fabiola Oviedo Vega como por la señora Cipriana Mercado de Salazar esta administradora se estará a lo resuelto en el proceso ordinario laboral iniciado ente el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín...”.

viii) Que a la investigación administrativa realizada por Colpensiones fueron allegadas las siguientes declaraciones extrajuicio:

- Declaración extrajuicio de 3 de octubre de 2013 donde la señora Luisa Fernanda Mora Cuello manifestó que “...conozco de vista, trato y comunicación al señor Jaime León Piedrahita Peña desde hace 8 años y me consta que falleció en la ciudad de Medellín, por muerte natural el veintiuno de julio de 2013, que al momento de su muerte convivía en unión libre con la señora Cipriana Mercado de Salazar, que esa unión permaneció hasta la fecha de su fallecimiento...”.
- Declaración extrajuicio de 7 de octubre de 2013 rendida por la señora Luz Marina Henao Trujillo en la cual indicó que “... conocí en forma personal desde el año 2005 por amistad en la familia, al señor Jaime León Piedrahita Peña, tenía unión marital de hecho desde el año 2005 con la señora Cipriana Mercado de Salazar, unión que fue vigente hasta que él falleció 21 de julio de 2013, compartiendo techo, lecho y

mesa en forma continua. El finado Jaime León Piedrahita asistía por la subsistencia económica de su compañera Cipriana Mercado...”.

- Declaraciones extrajuicio de las señoras Luz Marina Henao Trujillo y Sofie Amalia Correa Castaño donde afirmaron que *“...conocieron durante 10 y 9 años, respectivamente, de trato, vista y comunicación al señor Jaime León Piedrahita Peña, fallecido el 21 de julio de 2013, que convivía en unión libre con la señora Cipriana Mercado de Salazar, convivieron desde el 12 de octubre de 2005 hasta el día en que falleció, tiempo durante el cual compartieron techo, lecho y mesa, de esta unión no existen hijos. El señor Jaime León Piedrahita Peña era la única persona encargada del sostenimiento económico de su compañera él era quien la sostenía de un todo y por todo...”.*

DEL DERECHO PENSIONAL

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

El documento que reposa a folios 8 del expediente informa que el señor Jaime León Piedrahita Peña falleció el 21 de julio de 2013. Por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme al artículo 12, cuando un **pensionado** fallece, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros de su grupo familiar, y según el artículo 13, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: **en forma vitalicia**, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite que a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad, siempre y cuando acredite que estuvo haciendo vida marital con el fallecido hasta la fecha de su muerte y convivió con él **no menos de cinco años continuos** con anterioridad

a su deceso; y **de manera temporal**, el cónyuge o la compañera permanente superviviente que a la misma fecha tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 32393 de 20 de mayo de 2008, SL 45600 de 22 de agosto de 2012, SL 793 de 2013, SL 1402 de 2015, SL 14068 de 2016 y SL 347 de 2019, había sido enfática en señalar, que la Ley 797 de 2003 exige una convivencia mínima para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañero o compañera permanente, de cinco años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado.

Sin embargo, en providencia **SL 1730, Radicado 77327 de 3 de junio de 2020**, la Honorable Corte Suprema de Justicia, ante su nueva integración de su Sala de Casación Laboral, revaluó la referida posición jurisprudencial, para sentar nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, advirtiendo que la redacción de tal precepto legal, exige un tiempo mínimo de convivencia de 5 años pero “únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado”, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, “convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes, por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión”. Definió dicha Corporación que:

“...Para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente superviviente del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia...”.

Así mismo, el Alto Tribunal aclaró que para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, “no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el

caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social.”

Igualmente precisó que si bien el artículo 10 del Decreto 1889 de 1994, consideraba compañera o compañero permanente para efectos de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de un afiliado, la última persona que hubiese hecho vida marital con aquel durante un lapso no inferior a dos (2) años, éste estatuto no puede ir más allá de lo dispuesto en la ley, imponiendo requisitos que superen lo legalmente establecido, máxime que fue subrogado por el artículo 2.2.8.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, luego, para determinar quién ostenta la calidad de compañero o compañera permanente de un afiliado, a efectos de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debe acudirse a la noción constitucional de familia, en la forma en la que ha sido ampliamente analizada por la Corte Constitucional.

Señalando finalmente que, aunque aparentemente la diferenciación implícita en la disposición analizada surge discriminatoria, a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Nacional, “ello no puede entenderse así, por cuanto la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales”, lo que ocurre en estos eventos, al ser el afiliado quien está sufragando el seguro para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y no tener un derecho pensional consolidado, y el pensionado quien ya cuenta con el derecho, dejando causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte, circunstancia en la que adquiere relevancia la exigencia de un mínimo de tiempo de convivencia, precisamente para evitar fraudes al sistema pensional.

Tal criterio fue ratificado en sentencia **SL 3626 de 2020, Radicado 82317 de 23 de septiembre de 2020**, donde al citarse la referida sentencia SL 1730, se indicó:

“...En relación con el asunto controvertido, la doctrina reiterada de la Corte, verbigracia, en las sentencias SL1402-2015, SL14068-2016 y SL347-2019, había sido la de sostener que el término de convivencia mínimo tanto para beneficiarios

de afiliados al sistema general de pensiones como de pensionados era de cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante. Sin embargo, esta Sala recientemente --al efectuar un nuevo estudio de la norma acusada, esto es, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003--, modificó la anterior posición jurisprudencial y, en su lugar, adocrinó que, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge, compañero o compañera permanente supérstite del afiliado fallecido, no era dable exigir *ningún tiempo mínimo de convivencia*, toda vez que con la simple acreditación de la calidad requerida y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se acata el supuesto previsto en la norma, previo cumplimiento, obviamente, de los requisitos de causación pertinentes...”.

Así mismo, en la sentencia **SL 3785 de 2020, Radicado 76472 de 30 de septiembre de 2020**, se precisó:

“Ahora bien, ese sostenimiento de los lazos familiares hasta el momento de la muerte del causante cobra una mayor relevancia en función de lo recientemente adocrinado por esta sala en la sentencia CSJ SL1730-2020, en la que se dijo que, tratándose de la muerte de afiliados:

[...] con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto *en el literal de la norma analizado*, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación.”

Y en la sentencia **SL 4008 de 2020, Radicado 76044 de 5 de octubre de 2020**, se dijo:

“...De ahí que, entre 2005 y 2011 se exigía a la cónyuge del afiliado o del pensionado no solo los cinco años de convivencia, sino que esta permaneciera vigente al momento de la muerte del causante, pues fue solo con la CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 40055 que la Corte precisó que tales años de cohabitación podían cumplirse en cualquier tiempo y esta última postura estuvo vigente hasta que la reciente sentencia CSJ SL1730-2020 precisó que tal requerimiento solo se realiza con respecto de la consorte o compañera permanente del pensionado, mas no del afiliado...”.

Ahora, en las sentencias SL 5151 de 2019, SL 1869 de 2020, SL 2746 de 2020 y SL 093 de 2021, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación señaló que si bien la Corporación en la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha entendido que tanto la cónyuge como la

compañera permanente deben cumplir con el requisito de convivencia hasta la muerte y por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento, cuando ocurra la muerte del pensionado, en una interpretación armónica con el inciso 3 del literal b) *ibidem*, tratándose del evento del cónyuge separado de hecho, ha precisado que la convivencia de los 5 años puede verificarse *en cualquier tiempo*. Esto, por cuanto el legislador, cuando se refiere a la posibilidad del cónyuge de acceder al beneficio prestacional periódico cuando medie «separación de hecho», naturalmente presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte. En dicho sentido, se protege a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social. Por manera que, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes frente a la adquisición del derecho.

En torno al adecuado entendimiento de dicho precepto legal, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido, de vieja data, que el término de convivencia, que en el marco de la seguridad social permite acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes, en tratándose de cónyuges o compañeros (as) permanentes, hace referencia a la vida común en pareja, caracterizada por lazos de amor, solidaridad, afecto, colaboración y apoyo mutuo, con vocación de formar una familia, entendida entonces como la «efectiva comunidad de vida, construida sobre una real convivencia de la pareja, basada en lazos de afecto y el ánimo de brindarse sostén y asistencia recíprocos» (Sentencias SL de 29 noviembre de 2011, radicado 40.055; SL 4549 de 2019, radicado 68.689 y SL 3861 de 2020).

El Alto Tribunal en la sentencia SL 6286 de 2017, radicado 62.413, resaltó que: “...En la perspectiva trazada, de tiempo atrás tiene dicho la Sala que en el caso concreto del cónyuge y los compañeros permanentes el concepto de convivencia comprende circunstancias que van más allá del meramente económico, pues implica el acompañamiento espiritual permanente, proyecto familiar común, apoyo económico, el compartir la vida de pareja y la cohabitación bajo el mismo techo, que es la regla...”.

A juicio de la Corporación más allá de la situación formal existente entre la pareja, lo que determina el derecho a la pensión de sobrevivientes es una convivencia real y efectiva que entraña una comunidad de vida estable y permanente, en tanto adquiere “...una connotación eminentemente material en oposición a los aspectos meramente formales del vínculo, además de que, jurídicamente hablando, debe ser estable, permanente y lo suficientemente sólida para consolidar un grupo familiar, que es el objeto de protección constitucional y legal...”. Tal concepto comprende circunstancias que van más allá del meramente económico, pues implica el acompañamiento espiritual permanente, proyecto familiar común, apoyo económico, el compartir la vida de pareja y la cohabitación bajo el mismo techo, que es la regla. (Sentencias SL 11940 de 2017, Radicado 47.913, SL 3861 de 2020 y SL 087 de 26 de enero de 2021, Radicado 76.296).

Con tal orientación, la Corte ha explicado que tal concepto excluye los encuentros pasajeros o esporádicos, e incluso las relaciones sentimentales que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.

Ha precisado el Órgano de cierre de la jurisdicción laboral que la convivencia exigida para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es aquella que corresponde al “acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales” (Sentencias SL de 31 de enero de 2007, Radicado 29.601, SL 5640 de 2015 y SL 852 de 9 de marzo de 2021, Radicado 74.263).

Y en la sentencia SL 087 de 26 de enero de 2021, Radicado 76.296 señaló:

“...Asimismo, la jurisprudencia ha expuesto que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón circunstancias especiales, como lo son, por ejemplo, las oportunidades laborales o problemas de salud, lo que per se no implica que desaparezca la comunidad de vida de la pareja, «si notoriamente

subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio» (CSJ SL1399-2018).

De esa manera, la convivencia no implica residir en el mismo lugar, sino otras circunstancias que tienen que ver con la «continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente», de donde se derive que no ha sido la intención de la pareja finalizar su relación, sino que, por situaciones ajenas a su voluntad, hacen imposible que la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar (CSJ SL, 10 may. 2007, rad. 30141, reiterada en CSJ SL14237-2015).

Con ese mismo norte, se ha precisado que cuando existan desacuerdos propios de la relación de una pareja y ello genere que temporalmente no compartan el mismo techo, pero se mantengan, de manera clara e inequívoca, otros aspectos que indiquen que a los compañeros no les interesa acabar con la relación, es decir, que pese a no vivir juntos el vínculo permanece a través de los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, tal distanciamiento no tiene la vocación de romper la convivencia (CSJ SL3202-2015)...”.

En ese orden de ideas, teniendo presentes las reflexiones anteriores, que son acogidas por esta Sala en este asunto, conforme al material probatorio se analizará el requisito de convivencia entre los señores Cipriana Mercado de Salazar y Jaime León Piedrahita Peña por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado.

Sea lo primero indicar que en el interrogatorio de parte absuelto por la señora **Cipriana Mercado de Salazar**, afirmó que el señor Jaime León Piedrahita Peña falleció el 21 de julio de 2013, que para la fecha de su fallecimiento el causante vivía en Medellín en la casa de sus padres en razón a que sufría de cáncer de estómago, que antes de presentarse dicha situación convivía con ella en el municipio de Caucasia, eran compañeros permanentes, que iniciaron una relación

sentimental desde 2005 y en 2006 se consolidó su convivencia, que la convivencia se dio la mayoría del tiempo en el municipio de Caucasia, que no se llegaron a separar durante su relación “ (...) *el último año, cuando él ya estaba muy enfermo se tuvo que venir para acá, pero a mí me tocaba estar viniendo seguido...*”, que a raíz de su enfermedad su compañero permanente estuvo aproximadamente un año y medio en Medellín, que durante dicho periodo se sostuvo la relación sentimental entre ambos, que el cuidado del causante estuvo a cargo de la madre de éste y de ella, que no pudo quedarse en Medellín porque tenía muchos pendientes en Caucasia que debía de solucionar primero, que el señor Jaime León trabajó en Caucasia en sociedad con un hijo de ella en un local de mecánica, que nunca dejó de visitar al causante durante el tiempo que estuvo viviendo en el municipio de Medellín, que su compañero estuvo casado con la señora Fabiola Oviedo pero se separaron y nunca volvieron a convivir juntos.

Ahora, se procedió con el análisis del testimonio de la señora **Luz Marina Henao Trujillo**, con el fin de verificar si resulta conducente para orientar el convencimiento de la Sala en torno a la existencia del referido requisito de la convivencia entre la demandante y el causante, y para ello se acogió las directrices plasmadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil¹.

La citada deponente, adujo que que conoció al señor Jaime León Piedrahita Peña porque era el compañero de la señora Cipriana Mercado de Salazar, quien es su amiga desde 1990, que la pareja residía en el municipio de Caucasia, que iniciaron su convivencia a partir de 2005-2006, pero no recuerda con exactitud la fecha, que le consta la convivencia porque a raíz de su trabajo tenía que viajar a dicho municipio y se hospedaba en casa de la actora, que el señor Jaime León Piedrahita Peña presentaba a su amiga Cipriana Mercado de Salazar ante la sociedad como su esposa, que para la fecha de su fallecimiento el causante vivía en Medellín por motivo de su enfermedad, que ella viajó de forma frecuente al municipio de Caucasia por un lapso aproximado de tres años hasta el año 2008, que después siguió teniendo contacto con la pareja en Medellín, que visitó en varias ocasiones al causante cuando estuvo enfermo en compañía de la señora

¹ En la sentencia 4978 del 5 de mayo de 1999

Cipriana Mercado de Salazar, quien se hospedaba en su casa de Villahermosa, pero no iba muy seguido, que la pareja vivió con ella y con su hermana en el barrio Villahermosa, que la actora cuidó a su compañero permanente en la enfermedad y lo acompañó todo el tiempo y que una vez el señor Jaime León se radicó en Medellín, le consta que la accionante estuvo viviendo con él de forma continua y constante.

Luego, tal y como lo ha precisado la Sala Laboral del órgano de cierre de esta jurisdicción, lo que quiso amparar el legislador, de cara a la prestación pensional de sobrevivientes, es la perdurabilidad, de manera patente, de la «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable (...)»².

A juicio de la Sala, la “comunidad de vida” aludida no quedó evidenciada en este caso, pues se considera que conforme a la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia referida en precedentes, la declaración de la señora Luz Marina Henao Trujillo no resulta suficiente para establecer como lo define la Corporación mencionada el requisito de convivencia, entendiéndolo como la conformación de una familia con vocación de permanencia, por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado. Ello, por cuanto la señora Luz Marina Henao Trujillo aseveró que la pareja inició convivencia a partir de 2005-2006, pero no recuerda con exactitud la fecha, que viajó a Caucasia por un lapso aproximado de tres años hasta 2008, que la pareja vivió con ella y con su hermana en el barrio Villahermosa y que después siguió teniendo contacto con la pareja en Medellín, pero no establece con precisión los extremos temporales en que se dio la convivencia entre los compañeros permanentes, además indicó que la accionante estuvo viviendo con el causante de forma continua y constante, pese a que la misma demandante afirmó que señor Jaime León Piedrahita Peña con anterioridad a su muerte llevaba aproximadamente un año y medio viviendo en Medellín en la casa de sus padres en razón a que sufría de cáncer de estómago y que antes de presentarse dicha situación convivían en el municipio de Caucasia,

² CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605; SL7299-2015; SL1399-2018

sin haber mencionado que convivió por periodo alguno con su compañero permanente en la vivienda de la testigo. Por lo que a juicio de la Sala, la declarante en mención desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aludida convivencia entre compañeros permanentes durante los últimos 5 años anteriores a la fecha del deceso del causante, esto es, entre el 21 de julio de 2008 y la misma fecha de 2013.

De otro lado, a la investigación administrativa realizada por Colpensiones fueron allegadas declaraciones extrajuicio donde la señora Luisa Fernanda Mora Cuello manifestó que *“...conozco de vista, trato y comunicación al señor Jaime León Piedrahita Peña desde hace 8 años y me consta que falleció en la ciudad de Medellín, por muerte natural el veintiuno de julio de 2013, que al momento de su muerte convivía en unión libre con la señora Cipriana Mercado de Salazar, que esa unión permaneció hasta la fecha de su fallecimiento...”*; la señora Luz Marina Henao Trujillo indicó que *“... conocí en forma personal desde el año 2005 por amistad en la familia, al señor Jaime León Piedrahita Peña, tenía unión marital de hecho desde el año 2005 con la señora Cipriana Mercado de Salazar, unión que fue vigente hasta que él falleció 21 de julio de 2013, compartiendo techo, lecho y mesa en forma continua. El finado Jaime León Piedrahita asistía por la subsistencia económica de su compañera Cipriana Mercado...”*; y las señoras Luz Marina Henao Trujillo y Sofie Amalia Correa Castaño afirmaron que *“...conocieron durante 10 y 9 años, respectivamente, de trato, vista y comunicación al señor Jaime León Piedrahita Peña, fallecido el 21 de julio de 2013, que convivía en unión libre con la señora Cipriana Mercado de Salazar, convivieron desde el 12 de octubre de 2005 hasta el día en que falleció, tiempo durante el cual compartieron techo, lecho y mesa, de esta unión no existen hijos. El señor Jaime León Piedrahita Peña era la única persona encargada del sostenimiento económico de su compañera él era quien la sostenía de un todo y por todo...”*.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, como las practicadas ante alcalde o notario, pueden tomarse como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 220 del Código General del Proceso, no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite. Razonamiento que según la Corporación se acompasa con la política

legislativa que en materia probatoria se viene adoptando, con la finalidad de menguar el exceso de rigor formal que antaño campeaba en los códigos de procedimiento. Así lo indicó en la sentencia de Radicado 37.517 del 29 de mayo de 2012, reiterada en sentencias de Radicado 42536 del 6 de marzo de 2013, SL 1227 de 2015, SL 14067 de 2016 y SL 3134 de 2020 de Radicación 70165 de 25 de agosto de 2020, en esta última indicó:

“...De conformidad con el criterio expuesto, en ninguna violación medio pudo incurrir el juez de segundo grado, al haber valorado las declaraciones extrajuicio, rendidas en la Notaría Primera del Circulo de Fusagasugá por Nelsi Patricia y Óscar Javier Cucaita Martínez, pues no era necesaria su ratificación dentro del proceso, como se dejó visto, salvo que la parte contraria la hubiese solicitado, lo cual no aconteció en el presente asunto en ningún momento de las instancias previas...”.

En el presente asunto, la parte accionada no solicitó la ratificación de tales declaraciones, por ello, no era necesario en este juicio llevar a cabo dicha diligencia de ratificación para que tuviesen mérito probatorio. Con mayor razón si se tiene en cuenta que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le confiere al Juzgador la facultad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, salvo en los casos en que ley exige determinada solemnidad para la validez de la prueba.

Pese a las anteriores precisiones, no puede pasar por alto esta Sala de Decisión, que el valor probatorio de dichas declaraciones debe ser analizado con el rigor propio de la prueba recaudada al interior del proceso, pues el hecho de no haberse solicitado su ratificación por la parte contra quien se aduce no la releva del deber de contener elementos que permitan dar por probada las circunstancias allí contenidas, tales como el determinar el testimoniante la razón del conocimiento de los hechos sobre los cuales depone.

A juicio de la Sala si bien es cierto que las declaraciones referidas, informan sobre la existencia de una unión marital de hecho por 5 años entre la pareja hasta la fecha de la muerte del causante, lo cierto es que las aportadas de la forma antes

indicada no dan elementos de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la convivencia entre compañeros permanentes, ni las razones completas de porqué les consta lo afirmado a los deponentes. Máxime que ninguna de las declarantes en su momento hizo referencia al hecho de que el señor Jaime León Piedrahita Peña para la fecha de su fallecimiento vivía en la casa de sus padres en razón a su estado de salud. Hecho que fue puesto en conocimiento en este juicio por la actora en el interrogatorio de parte, en tanto la finalidad procesal de dicha prueba es provocar confesión, y de tal diligencia, no puede extraerse válidamente alguna confesión que la favorezca a sí misma, dado que por definición esta debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, tal como y lo ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 816 de 19 de noviembre de 2013, Radicado 44.701 y SL 8002 de 18 de junio de 2014, Radicado 38.381.

Corolario de lo anterior, conforme al material probatorio analizado en conjunto encuentra la Sala desvirtuado el periodo de convivencia aludido.

Así las cosas, en criterio de la Sala que no se encuentra acreditado el requisito de convivencia entre los señores Cipriana Mercado de Salazar y Jaime León Piedrahita Peña por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado.

En consecuencia, se confirmará la decisión absolutoria de primera instancia que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

Ante la desventura del recurso de alzada, las costas en esta instancia corren en favor de Colpensiones y a cargo de la señora Cipriana Mercado de Salazar. Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$908.526,00.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la providencia de primera instancia que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Ante la desventura del recurso de alzada, las costas en esta instancia corren en favor de Colpensiones y a cargo de la señora Cipriana Mercado de Salazar.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$908.526,00.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 92 del 28 de Mayo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL
GOMEZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12

Código de verificación:

4a222565d7c80d35c9d65e55467560bce4d97075f3f43d14f6691774067b01c4

Documento generado en 27/05/2021 02:36:24 PM